

C.A. de Temuco

Temuco, veintiocho de abril de dos mil veintitrés.

**VISTOS:**

En causa RUC 22- 4-0379959-2, RIT T-20-2022, del ingreso del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, con fecha 25 de octubre de 2022, se dictó sentencia definitiva por el Juez Suplente, don Claudio Campos Carrasco, que acogió parcialmente la demanda interpuesta por don VÍCTOR MAURICIO ÁGUILA CABRERA, en contra de MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, declarándose que entre las partes existió una relación de naturaleza laboral a partir del mes de diciembre de 2010 al 15 de noviembre de 2021.

Declaró asimismo que el actor fue vulnerado en su derecho a la integridad psíquica, prevista en el artículo 19 No.1 de la Constitución Política de la República, con ocasión del despido indirecto, y ordenó pagar al demandante, los siguientes rubros y montos:

a) Indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo, correspondiente al pago de 10 remuneraciones, de lo que resulta la cifra de \$8.900.000.

b) Indemnización por años de servicios (11 años), equivalentes a la suma de \$9.790.000.

c) Indemnización sustitutiva de falta de aviso previo equivalente a la suma de \$890.000.

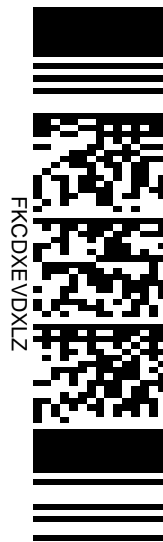
d) Incremento legal establecido en el art. 171 del Código del Trabajo por el 50% si se acoge la causal del artículo 160 No.7 del Código del Trabajo, que corresponde a \$4.895.000.

e) Por remuneraciones adeudadas, la cantidad de \$1.364.656.

f) Por feriado legal la suma de \$1.245.972.

Finalmente rechaza toda pretensión no considerada precedentemente, estableciendo que cada parte pagará sus costas.

En contra del referido fallo, la demandada Municipalidad de Temuco, representada por el abogado don Luis Reyes Medel,



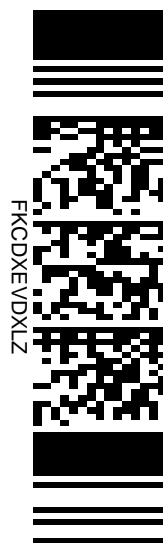
interpuso recurso de nulidad fundada en las causales del artículo 477 y aquellas establecidas en las letras c) y b) del artículo 478 del Código del Trabajo, las que se alegan una en subsidio de la otra.

La vista de la causa tuvo lugar en la audiencia del día diecinueve de abril de dos mil veintitrés, interviniendo las partes, quienes alegaron lo pertinente a sus pretensiones.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Qué, como ya se adelantó, la parte de demandada recurre de nulidad invocando, como primera causal, la establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, estimando como infringidos los artículos 1, 3, 7 y 8 todos del Código del Trabajo; y los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 4º de la Ley 18.833 Estatuto Administrativo.

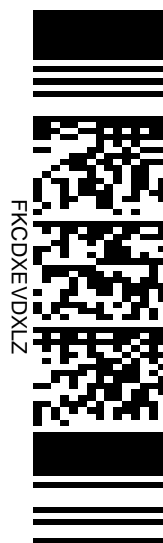
Expresa que la Municipalidad como tal, y como todo servicio público, está sujeta al control de legalidad, por lo que sus actos son en cumplimiento de la misma, y sus funciones en servicio de satisfacer las necesidades de la comunidad. Dicho lo anterior, es que la contratación a honorarios de la demandante, obedecía a satisfacer las necesidades de la comunidad local, cuyo carácter era transitorio y el actor cumplía funciones específicas. El acto que formaliza el contrato de honorarios, es un decreto, el que se encuentra amparado y revestido de la "buena fe administrativa", principio que le da validez a los actos de la administración, además que ha sido celebrado en virtud del artículo 4º de la Ley 18.883, observando los requisitos que la misma norma impone, ello, en relación al artículo 1º del Código del Trabajo, que en su inciso 2º excluye expresamente la aplicación del mismo a los funcionarios de la administración descentralizada cuando se encuentran sometidos por ley a un estatuto especial. En el caso de autos, y como ya en reiteras ocasiones se ha dicho, se ha realizado bajo los supuestos que la legalidad permite al servicio público, por lo que querer alterar la naturaleza jurídica del acto o contratar bajo las normas del Código del Trabajo, sería desconocer el ordenamiento jurídico existente.



Concluye señalando que, no existiendo actualmente para la Municipalidad la facultad de contratar bajo las normas del Código del Trabajo, es que el tribunal inferior ha debido forzar la aplicación de las normas del mismo, influyendo en lo dispositivo del fallo, para estimar que la relación en cuestión tenía una naturaleza laboral, por ello desconoce 1) El contrato a honorarios existente entre las partes, amparado por la buena fe administrativa; y 2) La estricta sujeción a las leyes y la Constitución por parte del municipio y sus funcionarios, por lo que, de haber realizado una correcta aplicación de los estatutos normativos, habría resuelto en sentido contrario, es decir, rechazando la demanda en todas sus partes, por desestimar una relación laboral.

**SEGUNDO:** Que, respecto de la causal de nulidad invocada por el recurrente, es menester la aceptación de la premisa fáctica determinada por el juez a quo, esto es, aquella fijada en el considerando séptimo, en que se determinó la concurrencia de los presupuestos de hecho para la existencia de una relación de carácter laboral, atendido la duración en el tiempo, las labores desarrolladas, la existencia de jornada, entre otras que configuran un vínculo de dependencia y subordinación, no siendo posible subsumir dichos hechos en la hipótesis del artículo 4 de la Ley N° 18.883.

**TERCERO:** Que, de ese modo, y como ha asentado la Excma. Corte Suprema, por sentencias de 01 de abril de 2015 (Rol N° 11584-2014) 09 de Julio de 2015 (Rol N° 24388-2014), 06 de agosto de 2015 (Rol N° N° 23.647-2014) y 28 de abril de 2016 (Rol N° 1.496-2015) 19 de abril de 2016 (Rol N° 8.002-2015) se ha estimado que aquellos contrataciones a honorarios que exceden los márgenes dispuestos en los respectivos estatutos administrativos configuran en definitiva una relación regida por el Código del Trabajo. En este sentido en la sentencia de 19 de abril de 2016 ( Rol N°5699 de 2015), resolvió que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, las relaciones a honorarios en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que se establece , que

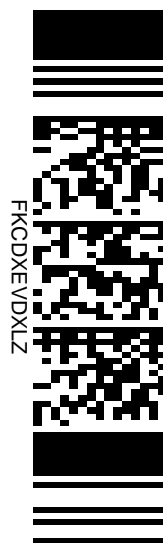


autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, y se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente. Tal es la doctrina, que, además, ha mantenido la Excma. Corte Suprema en el último tiempo, como por ejemplo, en sentencia Rol 63.339-2020, de modo tal que no existe infracción al artículo 4 de la Ley N° 18.883 al haberse constatado que en los hechos la relación que ligaba a las partes excedía con creces los alcances de dicho tipo de contrataciones. De ese modo, no se configura la causal invocada por el actor.

**CUARTO:** Que, en segundo término, y en subsidio de la anterior, la demandada funda el recurso en la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, por cuanto la relación existente entre las partes se enmarca en la modalidad del artículo 4° de la Ley N° 18.883, estimando que las labores realizadas por la demandante debían calificarse adecuadamente como específicas, de forma tal que la conclusión jurídica hubiera sido contraria, entendiendo que se calificó de manera errónea los hechos que tuvieron por acreditados en autos. Lo que lleva a que, para otorgar una acertada y justa resolución del asunto controvertido, es necesario alterar la apreciación o determinación de la naturaleza jurídica que otorga el fallo a las labores realizadas por el actor, debiendo ser calificadas como labores específicas

**QUINTO:** Que, así como se indicó en el considerando sexto, el ejercicio de ésta causal implica la aceptación de los hechos asentados en la sentencia. De igual modo, como se consignó en el considerando segundo de la presente sentencia, aquellos hechos asentados por el juez a quo exceden el ámbito de contratación a honorarios suma alzada, de modo tal que corresponde el rechazo de la causal por los mismos fundamentos ya expuestos.

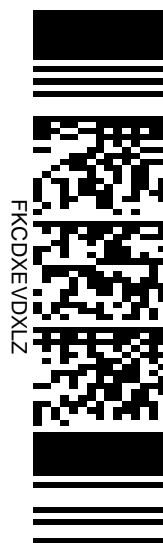
**SEXTO:** Así, en el caso de marras, el juez de la instancia, en el considerando séptimo, precisa el marco en que debe regirse una



relación contractual a honorarios, determina la premisa fáctica de la sentencia, esto es, que la naturaleza de los servicios prestados por la demandante tiene ciertas aptitudes, principalmente el largo tiempo de la relación, realizando las mismas funciones, las que escapan a las exigencias de accidentalidad o especificidad que exige el artículo 4 de la Ley N° 18.883, sino que, por el contrario, tienen las características propias de un vínculo de dependencia y subordinación de carácter laboral.

De ese modo, no se configura la infracción denunciada, por cuanto, en los casos en que las contrataciones a honorarios exceden los márgenes dispuestos en los respectivos estatutos administrativos, estos configuran en definitiva una relación regida por el Código del Trabajo. En este sentido en la sentencia de 19 de abril de 2016, la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N° 5699-2015 resolvió que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, las relaciones a honorarios en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que se establece, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, y se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente. Tal es la doctrina, que, además, ha mantenido la Excma. Corte Suprema en el último tiempo, como por ejemplo, en sentencia recaída en autos Rol 63.339-2020, por lo que no cabe sino el rechazo del presente recurso.

**SEPTIMO:** Que, en subsidio de las anteriores, la demandada funda el recurso en la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, “Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”, solicitándose que al acoger la causal deducida se dicte sentencia de reemplazo que rechaza la demanda deducida por la contraria.



En el caso de autos, no se realiza ninguna reflexión que justifique la conclusión a la cual arribó el juez, tomando en cuenta los límites que tiene para fallar. Teniendo presente que esta causal requiere un análisis de fondo de las infracciones denunciadas y el modo en que esta se han cometido por el sentenciador de manera que lo hayan llevado a incurrir al vicio denunciado y cumpliendo el estándar recursivo exigido reiteradamente por la Jurisprudencia de esta Corte, se pasa a desarrollar de qué manera se ha infringido los principios que gobiernan la sana crítica que se denuncian infringidas

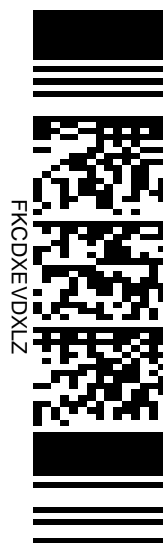
En el caso de autos, lo dicho en la sentencia, no guarda correlación con las ideas generadas durante el juicio, es decir, no existe una identidad, entre los conocimientos que han sido aportados y suministrados por las partes en el juicio, a través de los diversos medios de prueba tales como documentos, principio de la primacía de la realidad, como testimonios que se han expuesto a través de las declaraciones de los testigos que comparecieron a estrados; con lo señalado en la sentencia dictada por el juez de primera instancia. En efecto, consta como hechos establecidos y asentados en la causa los siguientes:

1.- La existencia de un vínculo contractual entre las partes desde partir del mes de diciembre de 2010 al 15 de noviembre de 2021.

2.- Que en virtud de esta vinculación el actor prestó servicios para la demandada en el programa Escuelas de Fútbol, dependiente del Departamento de Deportes.

3.- La remuneración del actor para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo era de \$ 890.000.

4.- Que el actor fue contratado bajo los supuestos del artículo 4 de la Ley 18.833, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en cuanto que podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad, mediante



decreto del alcalde. Además se podrá contratar sobre la base de honorarios la prestación de servicios para cometidos ' específicos conforme a las normas generales. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no le serán aplicables las disposiciones de este estatuto.

5.- Que con los documentos acompañados por la parte demandante y demandada entre ellos decretos alcaldicios que aprueban contratos de honorarios del actor, consta que se contrataban sus servicios para los cometidos especificados en un programa municipal.

6.- Al analizar los supuestos del artículo 4 de la Ley 18.883 la sentencia “Junto con los contratos antes mencionados, hay que señalar que fue aparejado un certificado de 05 de octubre de 2021, extendido por la jefe de personal del municipio demandado, doña Viviana Fuller Fernández, que certifica que el demandante se desempeña como funcionario a honorarios en el Programa Escuelas de Fútbol de la Dirección de Desarrollo Comunitario desde diciembre de 2010 a la fecha. Y, reforzando lo dicho, también se incorporaron las boletas de honorarios electrónicas extendidas por Víctor Águila a la Municipalidad de Temuco a contar desde el mes de octubre de 2010, las que, si bien no son correlativas, fueron extendidas mensualmente a la demandada por cada uno de los meses sucesivos en que prestó servicios. Sobre esto último, están contenidas las boletas 166,167 y 168, que corresponden a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021 (la de noviembre por el total del mes). Por último, puede apreciarse en el set fotográfico acompañado por la parte demandante que el actor, en el desarrollo de las actividades contempladas en los contratos suscritos, usaba una chaqueta de color negro con la leyenda Departamento de Deportes y un logo de la Municipalidad de Temuco. Así las cosas, resulta indiscutible la existencia de esta relación que se prolongó desde diciembre 2010 hasta noviembre de 2021, suscribiendo el demandante con la demandada diversos contratos, que aunque calificados de honorarios, en virtud del principio de primacía de la



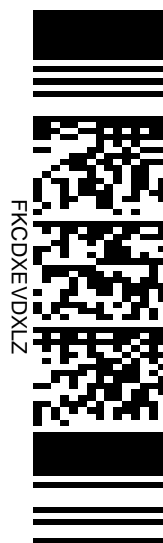


realidad, atendiendo a la duración del vínculo y la prestación de servicios de igual naturaleza durante todo el periodo, desempeñando las mismas funciones”.

Sin embargo, no considera en el análisis que se trata de una contratación para cometidos específicos conforme a las normas generales. No se indican cuáles son los presupuestos que infringen lo establecido en el artículo 4 de la ley 18.883 o los elementos propios del contrato de trabajo.

A su juicio, vulnera el principio de la identidad, que sirve de sustento el principio de la lógica, que es el entorno al cual debe el juzgador, adecuar al dictar la sentencia, lo que por cierto no efectuó. De haber respetado dicho principio y teniendo muy particularmente presente el hecho acreditado en la causa (especificidad de los informes y de las tareas encomendadas). De no haber infringido dicho principio de la forma que se expuso, el juzgador debió, necesariamente, haber llegado a la conclusión que se trataba de cometidos específicos y debió rechazar la demanda.

En el caso de marras la sentencia en su considerando noveno precisa que “De este modo, se mantuvo en esta situación de incertidumbre en el mes de agosto y septiembre, en el mes de octubre únicamente hasta el día 12, pues de allí en adelante estuvo con licencia médica hasta el 10 de noviembre, procediendo a auto despedirse el día 15 de ese mes. Así las cosas, existe la imposibilidad de que las partes se eximan del cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, en consecuencia, no es dable para el empleador, no otorgar el trabajo convenido al trabajador, incumplimiento que es de carácter grave y que habilita absolutamente para poner término a la relación laboral, pudiendo el dependiente auto despedirse conforme el artículo 171 del Código del Trabajo, en este caso en relación al artículo 160 No.7 del mismo cuerpo legal. DÉCIMO: Que, de acuerdo a lo razonado, estimando que se ha acreditado uno de los hechos que da lugar a la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que



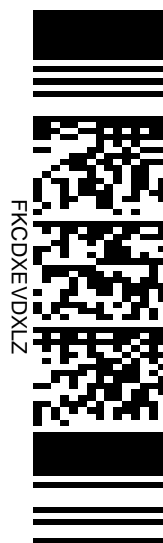


impone el contrato y, consecuentemente con ello, la causal misma, se considera inoficioso extender el estudio respecto de las demás, toda vez que la decisión respecto de la procedencia del auto despido, no variará en caso alguno.

A juicio del recurrente, el trabajador pudo razonablemente desarrollar los cometidos que se le contrataron en el mes de enero de 2021, no resultaba necesaria instrucción alguna al respecto, toda vez que bastaba con cumplirlas e informarlas como todos los prestadores. No existe prueba alguna que permita advertir de tal impedimento, pero como se tratan de un contrato a honorarios el prestador para obtener el pago de los emolumentos debe necesariamente informar cuáles son esas actividades desarrolladas y como se advierte no hay prueba en tal sentido, razón que impide pagar los honorarios pactados.

De esta suerte claramente el sentenciador a quo infringió, de forma manifiesta, las reglas de la apreciación de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, al vulnerar, claramente, el principio de la no contradicción, que sirve de sustento el principio de la lógica, que es entorno al cual debe el juzgador, adecuar al dictar la sentencia, lo que por cierto no efectuó.

En cuanto a las máximas de la experiencia, en este aspecto también existe una infracción manifiesta, toda vez que en base a la experiencia, resulta claro y evidente que si no hubo una adecuada valoración probatoria en el considerando DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, brota de la prueba el convencimiento acerca de la existencia de una enfermedad originada en su trabajo, de tipo psíquico, como lo es el trastorno ansioso generalizado, viéndose afectado por un acoso laboral que le ha provocado además de ello, un proceso psicoterapéutico, a la luz de los certificados extendidos por la médica Heidi Peschke Nappe, (que no es psiquiatra, ni neuróloga, sino un médico general) de 17 de enero de 2022, y del psicólogo David Figueroa Spielberg, de octubre de 2021, señalando el primero de ellos que estuvo en tratamiento antidepresivo y ansiolítico a partir del 14 de

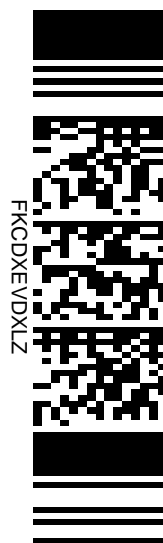


octubre de 2021, indicándosele reposo por 30 días en total. El segundo documento consigna que el proceso psicoterapéutico se inició el 16 de agosto de 2021, (la misma semana en que comenzaron los presuntos hechos vulneratorios) señalándose que el motivo de la consulta está referido a trastorno ansioso con ánimo deprimido. Agrega que los síntomas asociados al motivo de la consulta están referidos principalmente a crisis de ansiedad, desinterés generalizado, angustia y trastorno del sueño. Concordante con estos diagnósticos, fueron aparejadas dos licencias médicas extendidas por Heidi Peschke Nappe, cada una de 15 días de duración, lo que significa que estuvo con descanso prescrito desde el 12 de octubre al 10 de noviembre de 2021.

Precisa que no existió calificación de enfermedad profesional de ningún organismo técnico especializado y el informe pericial aparejado en autos no pudo ser ponderado por vicios de forma.

Agrega finalmente el sentenciador que: “En este escenario, forzosamente hay que cavilar que la decisión de auto despedirse del demandante resulta ser el corolario de una serie de circunstancias de acoso que lo perjudicaban y solución a tal problema, a su juicio, resultó poner fin a la relación contractual que mantuvo aproximadamente 10 años con la demandada. De suerte tal, que hay que sostener que se ha afectado la salud de la demandante en su dimensión psíquica, pues el Derecho del Trabajo otorga legitimidad a una relación de poder inherentemente compleja y vital, facultando el uso de potestades de mando y de dirección sobre la vida de otro, poniendo en clara desventaja al trabajador que se encuentra en situación de dependencia respecto a quien le provee el sustento material”.

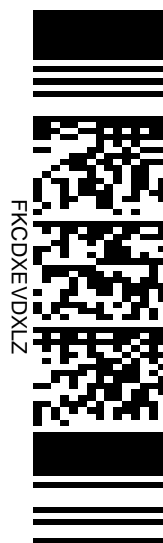
Sin embargo, estas graves consecuencias que asienta el tribunal no están acreditadas, ni se producen de la manera exponencial o elocuente. De esta suerte claramente el sentenciador a quo infringió, de forma manifiesta, las reglas de la apreciación de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, al vulnerar, claramente, las máximas de la experiencia, que sirve de sustento a la sana crítica, que es el entorno al



cual debe el juzgador, adecuar al dictar la sentencia, lo que por cierto no efectuó, por lo que, por esta vía, se solicita su enmienda. Como consecuencia de lo anterior, el fallo recurrido incurrió en la causal de nulidad alegada, referida en la suma precedente, por cuanto al resolver la controversia, de la manera que lo hizo, estimó que el actor se encontraba vinculado con la Municipalidad con un contrato de trabajo, reconociendo una relación laboral que no es tal, acogiendo el despido indirecto y concediendo de manera desproporcionada a una indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo, correspondiente al pago de 10 remuneraciones, de lo que resulta la cifra de \$8.900.000.

De haber fallado la sentenciadora, con apego estricto a las normas de la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, no podría haber colegido de los hechos que se dieron por probados en la causa ,que ellos eran constitutivos para tener por acreditada la infracción al artículo 4 de la Ley 18.883 y que de ello se siga a además el reconocimiento de la relación laboral del actor con mi representada y menos que el despido indirecto fuere ajustado a derecho y procedente. Ni menos que existiera una infracción del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política.

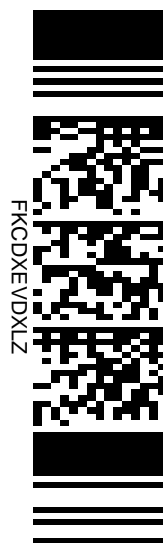
En consecuencia, teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente que se incurrió en el vicio denunciado, infracción manifiesta de las reglas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, salvable por la vía del recurso que se está deduciendo. Tal como se ha dicho el presente recurso de nulidad se fundamenta en el derecho en el artículo 478 letra b), del Código del Trabajo. Este interviniente solicita derechamente la declaración de nulidad de la sentencia recurrida, procediendo a dictar la correspondiente sentencia de remplazo que rechace la demanda, declarando que el vínculo que unió a al actor con la Municipalidad era un contrato a honorarios y no uno regido por las normas del código del Trabajo.



**OCTAVO:** Que, debe considerarse, que el recurso de nulidad no constituye una instancia, de manera que estos sentenciadores no pueden ni deben revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico de que se trata, siendo la apreciación y establecimiento de éstos una facultad exclusiva y excluyente del juez que conoció del respectivo juicio oral, y, asimismo, a esta Corte le está vedado de efectuar una valoración de la prueba rendida ante el Juzgado del Trabajo, lo que corresponde únicamente a éste y el cual está dotado de plena libertad para ello, con la sola limitación de no contrariar los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, siendo el cumplimiento de este límite lo que corresponde controlar, a través del llamado control de logicidad, cuando se invoca la correspondiente causal de nulidad, lo que en el presente caso no es posible al no haberse invocado por la recurrente ningún principio específico de la lógica, ninguna máxima experiencia o conocimiento científicamente afianzado que haya sido vulnerado por el sentenciador.

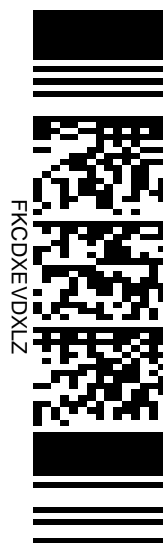
**NOVENO:** Que asimismo, hay que tener presente que, si en una sentencia existe infracción a las reglas de la sana crítica, ésta debe ser manifiesta y, sólo concurre cuando los hechos que sustentan la sentencia recurrida aparecen desprovistos de todo fundamento en relación a la prueba rendida o, están claramente controvertidos por ella, lo que en el caso en concreto no ha ocurrido, por lo que no se puede imputar al fallo la infracción denunciada.

En efecto, en el considerando séptimo el juez a aquo, se hace cargo de la alegación de la demandada, en cuanto a la existencia o no de un cometido específico, y ponderando la prueba señala: *“...Así las cosas, resulta indiscutible la existencia de esta relación que se prolongó desde diciembre 2010 hasta noviembre de 2021, suscribiendo el demandante con la demandada diversos contratos, que aunque calificados de honorarios, en virtud del principio de primacía de la realidad, atendiendo a la duración del vínculo y la prestación de servicios de igual naturaleza durante todo el periodo, desempeñando*



*las mismas funciones y reconociendo en los diversos instrumentos al demandante beneficios como: la posibilidad de presentar licencias médicas; la posibilidad de participar en actividades de capacitación relacionadas directamente con los servicios contratados, asumiendo el costo de éstas el municipio; la devolución de gastos, en el caso que deba trasladarse fuera del territorio comunal o nacional, la entrega de dinero por concepto de viáticos; la posibilidad de recibir el evento de seguridad protección, suponen que la prestación de servicios personales en el caso de marras, forzosamente debe ser tipificado como una relación de carácter laboral, por ende, sujeta a las normas del Código del Trabajo y no a un estatuto civil, que se derivaría de la aplicación del artículo 4 en el Estatuto del Funcionarios Municipales. En efecto de los antecedentes puede colegirse que las labores desempeñadas, en ningún caso son accidentales y no habituales en la municipalidad, condición básica para poder contratar honorarios a profesionales, técnicos o expertos, sean chilenos o extranjeros... ”.*

En cuanto a los indicios que sustentan la denuncia por tutela laboral, el sentenciador, en el considerando décimo cuarto, pondera: “Que, en consecuencia, brota de la prueba el convencimiento acerca de la existencia de una enfermedad originada en su trabajo, de tipo psíquico, como lo es el trastorno ansioso generalizado, viéndose afectado por un acoso laboral que le ha provocado además de ello, un proceso psicoterapéutico, a la luz de los certificados extendidos por la médica Heidi Peschke Nappe, de 17 de enero de 2022, y del psicólogo David Figueroa Spielberg, de octubre de 2021, señalando el primero de ellos que estuvo en tratamiento antidepresivo y ansiolítico a partir del 14 de octubre de 2021, indicándosele reposo por 30 días en total. El segundo documento consigna que el proceso psicoterapéutico se inició el 16 de agosto de 2021, señalándose que el motivo de la consulta está referido a trastorno ansioso con ánimo deprimido. Agrega que los síntomas asociados al motivo de la consulta están referidos



*principalmente a crisis de ansiedad, desinterés generalizado, angustia y trastorno del sueño.*

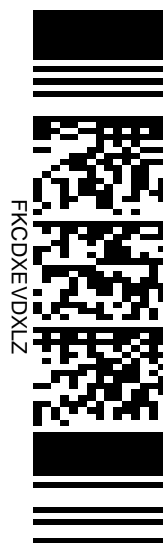
*Concordante con estos diagnósticos, fueron aparejadas dos licencias médicas extendidas por Heidi Peschke Nappe, cada una de 15 días de duración, lo que significa que estuvo con descanso prescrito desde el 12 de octubre al 10 de noviembre de 2021.*

*Asimismo, ambos testigos del demandante refirieron al momento de declarar que el estado de ánimo de éste. El testigo Cristian Holzapfel señaló que se contactó con el demandante y lo halló cabizbajo y un día se encontraron en el centro y le contó lo que le estaba pasando, que requirió asistencia profesional y estuvo con licencia médica psiquiátrica por todos estos problemas. Por su lado, Elías Barrientos indicó que no sabe qué ayuda profesional tuvo el actor, agregando que asistió a un servicio médico por stress laboral... ”.*

*De lo expuesto, concluye en el párrafo penúltimo de dicho considerando décimo cuarto: “... Así, siendo la demandada tributaria del cumplimiento de estas obligaciones, orientadas éstas a dar protección a sus dependientes, en la especie, ha incurrido tanto en acciones como en omisiones, que a la larga significaron que se conculcara la garantía constitucional de la demandante.”*

**DÉCIMO:** Que, además, resulta pertinente destacar que el recurso de nulidad es uno de impugnación y no de mérito, de lo que se sigue que importa una revisión de la validez del fallo dictado y, en particular y por la causal aquí esgrimida, significa un control sobre la aplicación de los conocimientos jurídicos, técnicos, científicos o de experiencia y las reglas de la lógica, al tiempo de valorar la prueba.

De ahí que no resulte aceptable que la impugnación se construya, como ocurre en este caso, a partir de la interpretación y valoración que el recurrente hace de la prueba rendida, donde exige un mayor estándar probatorio para acreditar la vulneración a la integridad física y psíquica del actor, pues reprocha que no existe una calificación de un órgano técnico especializado. Asimismo, no comparte



las conclusiones arribadas por el sentenciador, estimando que no se encuentran probadas.

**UNDÉCIMO:** Así las cosas, de una atenta lectura del arbitrio de nulidad, se desprende que lo verdaderamente cuestiona el recurrente no es la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, sino la convicción adquirida por el sentenciador que lo llevó a acoger la demanda de autos, criterio que naturalmente no comparte, pero que está lejos de constituir la causal de nulidad que se ha invocado.

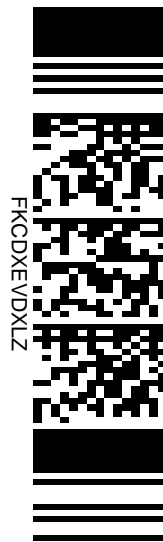
Que, en este escenario, solo queda rechazar el recurso intentado, según se dirá en la parte resolutive de este fallo.

**DUODÉCIMO:** Que el demandado en estrados, solicitó que esta Corte hiciera uso de la facultad conferida en el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo, en orden a acoger el recurso por un motivo distinto del invocado, señalando que la sentencia impugnada se dictó por juez incompetente, por cuanto, al haberse dictado la misma, ya habría cesado su suplencia como Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

Sin embargo, no se advierte mérito para actuar de oficio al tenor del inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo, por cuanto no consta la alegación efectuada por el recurrente, además no se encuentra controvertido que la audiencia de juicio se verificó íntegramente ante el juez que dictó la sentencia.

Además, se debe precisar que las facultades oficiosas se deben circunscribir a hechos que se contengan en el recurso, y que se puedan ajustar a una causal de nulidad diferente, lo cual no es el caso de autos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 474 y siguientes del Código del Trabajo, se declara: Que **SE RECHAZA**, el recurso de nulidad deducido por el abogado don Luis Reyes Medel, en contra de la sentencia definitiva de fecha 25 de octubre de 2022, la que en consecuencia no es nula.





Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Fernando  
Cartes Sepúlveda.

Rol N° Laboral - Cobranza-546-2022 (pvb).



Pronunciada por la Tercera Sala Laboral de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por su Presidente Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici, Fiscal Judicial Sr. Óscar Viñuela Aller y abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda. Se deja constancia que el Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici, no firma la sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.

En Temuco, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

